

Relaciones del Ecuador con sus Países Vecinos (Colombia-Perú)

PLANEX
2020

Plan Nacional de Política Exterior 2006-2020

Índice

Presentación

Emb. Francisco Carrión Mena 3

¿Qué es el PLANEX 2020?

Javier Ponce Leiva 5

Introducción

Javier Ponce Leiva 11

Relaciones Ecuador-Colombia

Ecuador – Colombia, Percepciones mutuas

La visión de Ecuador desde los medios de comunicación colombianos

Omar Ospina 31

La visión de Colombia desde los medios de comunicación ecuatorianos

Juan Carlos Calderón 45

La cooperación entre los medios de comunicación de Ecuador y Colombia

León Valencia 57

La seguridad en las relaciones Ecuador-Colombia

La política de seguridad democrática de Colombia,

Alfredo Rangel Suárez 59

La política de Defensa del Ecuador frente al conflicto colombiano

Oswaldo Jarrín 71

Enrique Ayala Mora 90

Delincuencia transnacional: narcotráfico, corrupción, terrorismo y lavado de dinero

Washington Pesantez 95

Carlos Espinosa 117

Michel Rowland 127

El impacto internacional del conflicto colombiano

La política de los países vecinos respecto a Colombia	
<i>Alejo Vargas</i>	129
Las gestiones internacionales sobre el conflicto colombiano	
<i>Hernán Moreano</i>	163
<i>Luis Narváez</i>	183

Las relaciones económicas Ecuador – Colombia

Inversiones, turismo e intercambio comercial	
<i>Marco Romero</i>	187

Integración fronteriza

Los proyectos binacionales de integración	
<i>Claudio Cevallos</i>	207
Desarrollo y Seguridad ciudadana en la zona fronteriza	
<i>Maximiliano Donoso</i>	227

Inmigrantes colombianos en Ecuador

Elementos para una política de extranjería	
<i>Raúl Baca</i>	239
<i>Jorge León</i>	251

Los refugiados colombianos en Ecuador

<i>Gina Benavides</i>	261
<i>Felipe Adolf</i>	284
<i>Luis Túpac-Yupanqui</i>	286
<i>Durval Martínez</i>	292

Relaciones Ecuador – Perú

Relaciones económicas Ecuador-Perú	
<i>Ignacio Basombrio</i>	297
La integración Fronteriza	
<i>José Morillo</i>	313
Cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 1998 entre Ecuador y Perú	
<i>Galo García Feraud</i>	325

La política de seguridad democrática de Colombia

Alfredo Rangel
Fundación Democracia
y Seguridad

Voy a tocar algunos aspectos fundamentales sobre la política de seguridad democrática del actual gobierno, dividiendo mi intervención en 3 partes: en la primera haré un reconocimiento de los méritos de la política actual, en la segunda señalaré algunos lunares de esa política y en la tercera propondré algunos ajustes o apuntalamientos para garantizar su sostenibilidad.

Los Méritos

En primer lugar, entre los méritos de la política seguridad democrática del gobierno actual está el haber ubicado el tema de la seguridad en el centro mismo de la agenda política nacional. Creo que el tema de la seguridad ha llegado a la agenda política nacional para quedarse, pues es impensable que en el futuro tenga éxito alguna propuesta encaminada a debilitar o revertir el proceso de fortalecimiento de la capacidad coercitiva del Estado, a disminuir el pie de fuerza de las Fuerzas Militares o a disminuir el presupuesto de seguridad y defensa.

En segundo término, creo que el gran mérito de la política de seguridad democrática del gobierno actual es haber mejorado nuestra percepción sobre la seguridad interna. Los colombianos en general nos sentimos hoy mucho más seguros que hace unos años y la comunidad internacional, los inversionistas, empresarios, medios de comunicación, etc., igualmente perciben que hay una mejoría sustancial en la seguridad dentro del país.

En tercer término, hay que señalar que esta percepción está fundamentada en unas mejorías sustanciales, objetivas, que son reflejadas en muchos indicadores: hay una reducción importante en los homicidios, en el secuestro, en las tomas de poblaciones, en el

desplazamiento forzoso, en las acciones de sabotaje económico realizados por la guerrilla. En buena medida la mejoría de estos indicadores está relacionada con la ejecución de la política de seguridad democrática; pero en parte algunos de ellos son procesos inerciales que vienen de tiempo atrás y que se han acentuado con la política del gobierno del presidente Uribe: el homicidio, por ejemplo, afortunadamente viene disminuyendo desde el año 91, el secuestro viene cayendo desde el año 2001; y en parte, esos éxitos tienen que ver en primer lugar con la tregua que, aunque incompleta, están realizando los grupos paramilitares en procura de llegar a un acuerdo en las conversaciones con el gobierno, y en segundo lugar, el mejoramiento en los indicadores de seguridad tiene que ver con la estrategia de repliegue que han venido desarrollando los grupos guerrilleros a partir de el punto culminante de sus acciones militares que tuvo lugar en el año 2002, cuando se terminaron las conversaciones con las FARC en el Caguán.

En cuarto lugar, la desmovilización de los paramilitares. Como resultado de la tregua de los paramilitares en los tres últimos años, el país se ahorró varios miles de homicidios, centenares de secuestros y decenas de miles de desplazamientos forzosos. El balance humanitario es altamente positivo y ni los más radicales detractores del proceso pueden afirmar lo contrario.

Desde el punto de vista político hay que reconocer que fue un logro del Estado haber desmovilizado y desarmado cerca de treinta mil combatientes y auxiliares de los paramilitares en un proceso que fue más un sometimiento a la justicia que una negociación política de paz. De hecho, el marco jurídico de la desmovilización, la Ley de Justicia y Paz, fue determinado de manera soberana por el Congreso, sin ningún tipo de consulta o transacción con los jefes paramilitares.

Con toda seguridad estos esperaban desmovilizarse en las mismas condiciones de amnistía e indulto general que tuvieron los grupos guerrilleros hace quince años. Además, tenían razones adicionales para esperarlo pues a diferencia de aquellos grupos guerrilleros, los paramilitares no estaban derrotados y, por el contrario, estaban en su mejor momento económico, político y militar cuando empezaron a desmovilizarse.

En consecuencia, haber desmontado unos grupos armados no derrotados, obligándolos a confesar la verdad de sus crímenes, pagar penas de cárcel y reparar a sus víctimas, es, sin duda, un inmenso triunfo político del Estado. Pero la culminación de esta

faena está ahora a cargo del sistema judicial y, en particular, de la Fiscalía General, pues es obvio que después de que los paramilitares aceptaron lo que consideran unas duras condiciones de desmovilización, ellos solo van a reconocer los crímenes que el Estado les pueda probar y, además de algún gesto simbólico, solo van a devolver los bienes cuyo origen ilícito les demuestre el Estado. Así, el balance judicial queda pendiente. Por lo pronto, uno de los grandes retos del Estado colombiano es desvertebrar las estructuras mafiosas que aún mantienen algunos grupos paramilitares.

Pero el balance más dudoso y más incierto es, sin duda, el estratégico. La desmovilización de los paramilitares ha ampliado la libertad de movimiento y el espacio de maniobra de la guerrilla, sobre todo en aquellas zonas donde la Fuerza Pública no tiene todavía la suficiente capacidad para neutralizar a la insurgencia. En términos estrictamente estratégicos el Gobierno y los paramilitares hicieron un mal cálculo: estimaron que la guerrilla sería controlada muy rápidamente por el Estado y que por tanto los paramilitares saldrían sobrando. Pero la guerrilla no ha sido derrotada y – al menos las FARC – siguen prácticamente intactas. Su retorno a las antiguas zonas paramilitares y el consiguiente deterioro de la seguridad es cuestión de poco tiempo.

Esto atenta contra la erradicación total del paramilitarismo pues este resurgirá allí donde la guerrilla vuelva a depredar a la población y el Estado no pueda evitarlo. También favorecerá su resurgimiento el hecho de que el narcotráfico no se haya incluido como tema de acuerdo : hubiera sido muy positivo haber exigido a los “paras” la erradicación manual de todos los cultivos de coca en sus zonas de influencia, antes de su desmovilización. Esto hubiera evitado el resurgimiento de nuevos grupos armados en esas áreas, o cederle a la guerrilla el usufructo de dichos cultivos.

Los Lunares

De otra parte, una vez hechos estos reconocimientos que considero esenciales, para hacer un balance y examinar la sostenibilidad de la política de seguridad democrática también es necesario señalar algunos lunares en su ejecución. En primer lugar, creo que un tema que se trata relativamente poco pero que es central en una política de seguridad nacional tiene que ver con la situación de las fronteras. A mi manera de ver es uno de los grandes lunares de la política de seguridad

democrática del gobierno originado en una inmensa precariedad en pie de fuerza y en movilidad de la tropa. La Fuerza Pública está concentrada en garantizar la seguridad interna y por ello efectos de la vigilancia de las fronteras estamos dependiendo en buena medida de la buena voluntad o de las intenciones de los países vecinos. La situación es preocupante porque nuestras fronteras terrestres son muy porosas y la falta de vigilancia hace que existan muchas vías por las cuales penetran ingentes cantidades de armas, de municiones, de explosivos de avituallamiento de todo tipo para los grupos irregulares sean guerrilleros o grupos paramilitares: en la frontera con Venezuela se han identificado 21 rutas de este tipo de tráfico irregular, en el Ecuador 25 rutas, en Brasil 14 y en Panamá 37 rutas de abastecimiento de todo este tipo de pertrechos y avituallamientos para los grupos irregulares. En suma, hay más de cien rutas de penetración en las fronteras terrestres del país para el mercado negro ilegal de estos grupos irregulares.

El segundo lunar de la política de seguridad democrática tiene que ver con los grupos paramilitares. Si bien hay unas conversaciones en curso, hay que señalar también que estos grupos paramilitares jamás habían estado tan fuertes como lo están en este momento. Han tenido un proceso sostenido de crecimiento durante los últimos años, de hecho, es el único grupo irregular que ha estado creciendo durante los dos años de la administración actual, tienen ingentes recursos económicos, están reclutando gente, se siguen armando, están penetrando las administraciones locales, están determinando la política regional y local, están infiltrándose en todos los niveles y en muchas agencias del Estado, incluso en los organismos de seguridad, además están manejando recursos de inversión de las administraciones municipales y departamentales. Es preciso señalar que aún cuando recientemente ha habido desmovilizaciones de algunos frentes paramilitares, sin embargo, si las conversaciones no culminan con éxito es muy probable que ese poder de los paramilitares, que no ha sido tocado por la ejecución de la política de seguridad democrática, les permita volver a movilizar gente y a rearmarse en muchos de sus frentes. No existe un Plan B para el caso de que se rompan las conversaciones con los paramilitares.

El tercer tema importante en una revisión de la ejecución de la política de seguridad democrática es el relacionado con el narcotráfico. En efecto, a pesar de que todos los indicadores muestran una

reducción de áreas sembradas de coca y de amapola, y de que ha habido un aumento significativo de las extradiciones de narcotraficantes, no obstante hay que señalar que muchos investigadores y agencias de investigación han demostrado que no ha habido una variación sustancial de la oferta de droga que esta saliendo del país. Esto se reflejaría en el hecho de que el precio final al consumidor en las calles en Estados Unidos no ha tenido una variación significativa, lo que quiere decir que la oferta se mantiene más o menos inalterada. Aumentos en la productividad y movilidad de las áreas sembradas explicarían por qué estos resultados no se corresponden con los grandes esfuerzos que se están haciendo para la lucha contra el narcotráfico.

Otro cuarto aspecto tiene que ver con el homicidio. Si bien los indicadores generales del homicidio en el país han mejorado, sin embargo subsisten ciertos problemas que son muy significativos y preocupantes. El homicidio de alcaldes y sobre todo de ex-alcaldes ha venido incrementándose en el último año a tal punto que es mayor que en los años anteriores. De manera similar en algunos departamentos como en el Valle, Caqueta, Casanare, Chocó y Guajira se han evidenciado incrementos preocupantes en el homicidio. El homicidio de maestros ha tenido también un incremento en el último año que pone esa cifra incluso por encima de años anteriores.

Un quinto tema es la seguridad en las vías del país, que ha mejorado de manera sustancial, como se ha señalado en múltiples estudios de la Fundación Seguridad y Democracia. Sin embargo, todavía en el país se está realizando un reten y cinco actos de piratería cada dos días; la piratería, que ha disminuido de manera muy sustancial en las zonas rurales, sin embargo, se ha concentrado y se ha incrementado de manera muy preocupante en las principales ciudades del país; el tráfico vehicular nocturno está interrumpido en vías tan importantes como la vía Bogotá – Medellín, la de Pasto – Tumaco y la de Buenaventura a Lobo Guerrero. Esto significa que no hay infortunadamente un éxito pleno en la recuperación de la seguridad vial. También hay que decir que en algunas zonas del país todavía es muy incipiente la recuperación del control territorial y en otros casos es superficial, lo demuestra el hecho, por ejemplo, de que el año pasado en Arauca se realizaron varios paros promovidos por los grupos armados que inmovilizaron el transporte vehicular entre los municipios de este departamento, en una zona en donde hay una altísima presencia de Fuerza Pública.

Un sexto lunar de la política de seguridad gubernamental es el incremento de la actividad guerrillera en estos dos últimos años. Hay que registrar un hecho muy paradójico: a pesar de los esfuerzos de la política de seguridad democrática, en los dos primeros años de la administración del Presidente Uribe la guerrilla realizó tantas acciones como durante los cuatro años anteriores del gobierno de Andrés Pastrana, aún cuando predominaron las acciones de baja intensidad por decirlo así, pequeños hostigamientos, pequeñas emboscadas y muchos campos minados que han ocasionado incrementos sustanciales en las bajas y heridos de las Fuerzas Militares. Esto está demostrando que aun dentro de esa situación de repliegue, la guerrilla no se ha mantenido inactiva, sino que por el contrario mantiene una importante capacidad de desestabilización y de acción en muchas zonas del país.

De otra parte, la actividad de las Fuerzas Militares ha venido teniendo un incremento muy sustancial en número de operaciones contra los grupos irregulares. Sin embargo, y este es el séptimo lunar, parece que en los dos últimos años las Fuerzas Militares ya están llegando al tope de sus posibilidades operacionales y que difícilmente podrán aumentar su presencia en otras zonas del territorio nacional o incrementar en forma sustancial la cantidad y la duración de sus operaciones. De hecho, el año pasado las Fuerzas Militares disminuyeron el ritmo de crecimiento de sus operaciones con relación a los años anteriores: en el año 2002 realizaron 1534 combates, en el 2003 fueron 2414 combates y en el 2004 fueron 1957. Así, en comparación con el año anterior respectivo, las Fuerzas Militares en el 2002 incrementaron sus operaciones en un 87%, en el 2003 las aumentaron en un 57%, pero en el 2004 las disminuyeron en un 18%, sin contar las acciones del Plan Patriota que, sin embargo, deberían ascender a la improbable suma de 1832 combates para que se hubiera mantenido el mismo ritmo de crecimiento operacional que en el 2003.

A esto hay que añadir el hecho de que en relación con el 2003 en el 2004 cayó el número de irregulares caídos en combate, al pasar de 3.239 a 2.786, siendo las autodefensas el grupo que más bajas sufrió por combate (1.72) y las FARC el que menos tuvo (1.32). Así mismo, bajó en un 5% el número de desertores de la guerrilla. Es decir, a pesar del inmenso esfuerzo realizado por las Fuerzas Militares con respecto a la guerrilla hay menos combates, menos bajas y menos desertores.

De otro lado, este es el octavo lunar, las acciones recientes de las FARC han ocasionado un impacto psicológico muy negativo dentro de sectores de opinión y su repercusión en los medios de comunicación está generando dudas acerca de la efectividad de la política de seguridad democrática. A mi manera de ver esta reanimación de algunos frentes de la guerrilla no significa de ninguna manera una derrota o una crisis de la política seguridad democrática, pero me parece que frente a las inmensas expectativas que se habían generado por la prematura divulgación de su supuesto éxito rotundo, estos golpes de pequeña escala militar están logrando unos resultados en términos psicológicos y políticos que son muy significativos. Lo que llevaría a pensar que si siguieran ocurriendo este tipo de ataques se impactarían aun más negativamente la percepción de éxito de la política de seguridad del gobierno actual.

Finalmente, se hecha de menos una política de seguridad urbana dentro de la política de seguridad democrática. La percepción de seguridad en muchas ciudades importantes del país ha venido decayendo y creo que los organismos de seguridad han centrado su esfuerzo en las zonas rurales , pero no han dedicado el mismo empeño para controlar la criminalidad en las zonas urbanas.

Los Ajustes

Para hacer sostenible la política de seguridad democrática habría que acometer acciones en distintos frentes. En primer término creo que es conveniente y necesario para el Gobierno dejar de pregonar que ya se ha obtenido una victoria sobre los grupos irregulares o que la victoria está a la vuelta de la esquina. Me parece que es necesario ser un poco más pragmáticos, más realistas y transmitir a la población la verdad, en el sentido de que esta es una lucha que ha tenido un éxito relativo, pero que el camino es largo y hay todavía un largo trecho por recorrerse.

En segundo lugar, creo que también hay que dejar de difundir la impresión de que el mayor esfuerzo en términos fiscales ya se ha hecho y que lo que faltaría es sentarse a esperar los buenos resultados. Me parece que a pesar de que el Gobierno ha hecho un importante esfuerzo para incrementar el gasto en seguridad y defensa, el Estado todavía no tiene los recursos necesarios para afrontar la situación de un país con un conflicto armado tan generalizado y tan complejo como el que existe en Colombia. Un 3.3% del Producto Interno

Bruto destinado al gasto militar en un país que esta en guerra me parece que es todavía una proporción muy baja. Otros países en situación de conflicto interno han dedicado al gasto militar en promedio montos superiores al 5% del Producto Interno Bruto. Pienso que el gobierno debería transmitir a la población el mensaje de que aunque ya se han hecho esfuerzos importantes, en el futuro se tendrán que hacer esfuerzos similares o aun mayores, para consolidar los logros y para poder avanzar en la búsqueda de la seguridad.

Un tercer tema tiene que ver con el servicio militar obligatorio. Este ha sido un tema muy traído y llevado en las campañas políticas y generalmente al comienzo de los gobiernos. En muchas ocasiones se ha querido introducir una mayor equidad en la prestación del servicio militar obligatorio, pero eso no ha sido posible y por eso el tema todavía hace parte de la agenda de una política de seguridad mucho más democrática. Hay que abandonar el esquema según el cual los ricos ponen la plata mientras los pobres ponen los muertos. Yo no creo que en esta larga guerra interna de más de cuarenta años haya existido un solo soldado caído en combate cuyos padres tengan un ingreso mayor de dos millones de pesos, todos son hijos de las familias más pobres del país. Me parece que el incremento del pie de fuerza de las Fuerzas Militares basado casi exclusivamente en el aumento del numero de soldados campesinos poco contribuye a remediar esta situación. Creo que hay que darle un vuelco al servicio militar obligatorio que garantice que proporcionalmente las clases medias y las clases altas también aporten su cuota de sacrificio en la búsqueda de la seguridad colectiva. Mientras ello no ocurra me parece que la búsqueda de la paz y de la seguridad como propósito nacional seguirá cojeando.

El cuarto tema tiene que ver con el Plan Patriota. Yo estoy de acuerdo en que tarde o temprano hay que acometer una acción muy fuerte contra la retaguardia de las FARC. Mi pregunta y mi gran interrogante es sobre la oportunidad actual del Plan Patriota. Me pregunto si este es el momento más adecuado para destinar cerca del 10% de la fuerza militar del país en una zona tan extensa como poco poblada, donde en promedio con la fuerza que se tiene cada soldado debe cubrir cerca de 10 o 15 kilómetros. Me pregunto si no seria mejor utilizar esos recursos militares tan escasos en unas zonas de mayor importancia para la economía nacional, con mayor densidad poblacional y más importantes en términos de estabilidad política. Lo

que el Ejército hizo en Cundinamarca a mi manera de ver es el éxito estratégico más grande que ha obtenido el Estado contra este grupo guerrillero y consistió precisamente en dismantelar los frentes que estaban rodeando a Bogotá, centro del eje del despliegue estratégico en los planes de guerra de las FARC. Este logro hay que sostenerlo y creo que habría que replicar este tipo de refuerzos en regiones alrededor de ciudades como en Medellín o Cali y en otras regiones del país. Me preocupa mucho el hecho de que un departamento como Nariño prácticamente se está perdiendo para el control del Estado: la presencia en aumento de grupos guerrilleros de las FARC y del ELN, así como el incremento de grupos militares, y el crecimiento de las hectáreas de sembradas de coca, son asuntos para preocuparse. Esto está sucediendo precisamente en el vecindario del Plan Patriota y creo que las Fuerzas Militares y la Policía están siendo insuficientes para controlar la situación. No es casual que muchas de las acciones importantes de las FARC recientes se estén dando precisamente en ese departamento. Las cifras oficiales hablan de unas 17.000 hectáreas sembradas de coca pero la gente de la región, incluso las autoridades civiles de este departamento, están hablando de cerca de 50.000 hectáreas de coca. Este departamento que colinda con Ecuador y tiene salida al mar es de una importancia estratégica esencial que no se está atendiendo en forma suficiente.

En quinto lugar, me parece que las Fuerzas Militares que han desarrollado un incremento muy significativo de sus actividades y han aumentado de su presencia en muchas zonas del país, sin embargo, no parecen haber pasado plenamente de la contención a la ofensiva. En algunos sitios claro se nota una mayor ofensiva que antes, pero, no obstante, las cifras están demostrando que en la inmensa mayoría de los casos las operaciones militares no son sostenidas, son de muy corta duración, y solamente unas muy pocas son sostenidas durante varias semanas o varios meses. Es claro que las Fuerzas Militares hacen lo que pueden con los recursos que tienen, por eso me parece que para que haya una posibilidad real de hacer una ofensiva mucho más sostenida, de mayor alcance y mucho más generalizada contra los grupos irregulares, pues hay que aumentar el pie de fuerza de una manera sustancial, mucho más de lo que se ha logrado hasta el momento, hay que mejorar e incrementar de manera sustancial igualmente la movilidad aérea, es decir, adquirir muchos más helicópteros de combate y de transporte de tropas, y hay que incrementar igualmente de manera muy

sustancial el presupuesto en operaciones. Insisto en que a pesar de los incrementos presupuestales que ha habido en los últimos años, me parece que para lograr éxitos mayores en la desarticulación de grupos paramilitares y de grupos guerrilleros es absolutamente necesario ese incremento de pie de fuerza, de movilidad y de presupuesto operacional.

Las comparaciones internacionales son absolutamente abrumadoras. En Colombia no nos podemos dar por bien servidos por el hecho de tener el ejército más grande de Sudamérica, incluso más grande que el de Brasil. En el momento más álgido de su conflicto interno, El Salvador tenía 2 veces más soldados por 100.000 habitantes 100 veces más soldados por kilómetro cuadrado que los que hay en Colombia. Uruguay, un país en paz, tiene hoy más soldados por cien mil habitantes que Colombia. Países europeos como España, Italia o como Francia, tienen más soldados por kilómetro cuadrado que Colombia. Todo esto está indicando que en nuestro país hay una precariedad muy grande en término de fuerza militar. Lo mismo sucede en términos de fuerza policial: para atender problemas de seguridad que son muchísimos más graves, Colombia tiene igual cantidad de policías por cien mil que Perú y Argentina, es inferior a Bolivia, y tiene la mitad del promedio de los países europeos. Bogotá tiene 3 veces menos policía por cien mil habitantes que la ciudad de Nueva York.

Un sexto punto. En lo relacionado con el narcotráfico, creo que las fumigaciones hay que continuarlas en ciertas zonas en donde hay cultivos extensivos fuertemente custodiados por grupos irregulares. Pero también creo que no se está haciendo lo suficiente para atacar el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico que es la salida de la droga de las zonas de producción. Golpear contundentemente en este punto tiene a la larga un impacto mucho más fuerte y duradero sobre la cantidad de hectáreas sembradas y sobre la oferta de droga, al tiempo que tiene unos costos políticos y ecológicos mucho menores que la fumigación indiscriminada. Pero la capacidad de interdicción del Estado colombiano es muy precaria pues solo se tiene capacidad para interceptar el 20% de las embarcaciones que salen cargadas de coca hacia los mercados internacionales. Habría que recurrir con más insistencia a la comunidad internacional para que en una actitud más comprensiva colabore con mayor intensidad con Colombia para tratar de atacar ese eslabón débil de la cadena del narcotráfico.

Finalmente, para garantizar la sostenibilidad de la política de seguridad creo que es necesario tener una política de paz mucho más pragmática, mucho más viable que la que tiene el gobierno actual. Es verdad que el Gobierno nunca ha cerrado la puerta para realizar conversaciones de paz con los grupos guerrilleros. Pero me parece poco realista su insistencia en condicionar estas conversaciones a que la guerrilla realice previamente un alto al fuego de manera unilateral e incondicional, así como su negativa a desmilitarizar una parte del territorio nacional para que sirva como escenario de esos diálogos. Pero además de los temas de procedimiento, me parece que hay algo de más fondo que es el eventual contenido de esas conversaciones con los grupos guerrilleros. Yo estoy convencido de que con estos grupos tarde o temprano tendrá que hacerse una negociación política, es decir, que la agenda de negociación con los grupos guerrilleros tendrá que ir necesariamente más allá del simple tema de la reinserción, de la desmovilización, y de garantizarles la seguridad para que no los maten en las calles y puedan hacer política por las vías legales. La agenda de la negociación con la guerrilla creo que debe ser un tema de debate nacional muy importante. En principio, el gobierno de Andrés Pastrana llegó a un acuerdo con las FARC sobre la agenda de negociación, que aun cuando no se desarrolló, fue el más importante acuerdo de ese accidentado proceso de conversaciones de paz. La gran discusión en el futuro será si el Estado colombiano va a respetar o no ese acuerdo con la guerrilla. Pero por lo pronto creo que sin una política de paz más integral, más pragmática y viable, todos los logros que se alcancen en el tema de la seguridad seguirán siendo precarios.

